

## MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA UNA PAZ DURADERA\*

Alfonso Jaime Martínez Lazcano

Jaime Cubides Cárdenas

*El grado de violencia y desinterés por la suerte de las víctimas permite observar  
que el derecho no representa nada, ni moral ni políticamente.*

*La barbarie humana se acerca a la animalidad de seres en pugna por el poder, en una  
lucha cada vez más cruenta por el acceso y uso  
a la tecnología de la muerte y no de la vida.*

Alfonso Jaime Martínez Lazcano

Aunque algunos autores establezcan que el conflicto armado contemporáneo en Colombia está imbricado en la llamada violencia bipartidista (Sánchez, 2014, p. 112), es necesario comprender que este conflicto no se puede definir como el simple fruto de lo acontecido en la segunda mitad del siglo XX<sup>55</sup>; por el contrario, se debe analizar desde la misma conquista española en el siglo XIV, dado que de los 3.000.000 indios de 1492 solo quedaban unos 60.000 tributarios (adultos

\* El capítulo contiene resultados del proyecto de investigación: "La convencionalización del derecho: el caso del ordenamiento jurídico colombiano desde la justicia multinivel y el posconflicto", que forma parte de la línea de investigación Fundamentación e Implementación de los Derechos Humanos, del grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia, registrado con el código COL0120899 en Colciencias, vinculado al Centro de Investigaciones Socio Jurídicas (Cisjuc), adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia.

55 También llamada década del estado de sitio o de las dictaduras (1946-1958) (Palacios, 1995, p. 131).

varones) en 1509, para 1518 se habían reducido a cerca de 11.000 y desaparecieron casi por completo en 1519 (Melo, 1996, p. 6); hechos que aún persisten en la historia colombiana, pues fueron innumerables los momentos en los cuales esta nación se hundió en la confrontación armada, como fue el caso de la independencia y las guerras civiles del siglo XIX; momentos históricos que generaron los problemas sociales causantes de la actual violencia colombiana toda vez que no fueron debidamente solucionados.

Por todo ello es indispensable afirmar que el conflicto en Colombia se ha extendido a lo largo de su evolución, puesto que los grupos derrotados en los innumerables combates mencionados, al no consolidarse una verdadera paz, se sublevaron con posterioridad bajo la idea de la reivindicación<sup>56</sup>, siendo la falta de atención por parte del Estado a las víctimas de dichas pugnas un factor adicional para la profundización de esta situación; tanto es así que una de las víctimas de la denominada época de la violencia durante los años cuarenta y cincuenta en el país fue Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, quien se desplazó forzosamente de su hogar a causa de su pertenencia al Partido Liberal (López-Uribe, 2015). Con estos antecedentes, se debe precisar que para la materialización de una verdadera paz en este territorio es necesario otorgar a las víctimas de este conflicto un papel fundamental dentro de los procesos encaminados hacia ese fin, no para entorpecer los avances logrados, sino como factores determinantes para su legitimación, teniendo presente que por las mismas condiciones especiales del conflicto del país, que sin duda no es homogéneo<sup>57</sup>, hay un sinnúmero de compatriotas afectados<sup>58</sup> que merecen no solo el apoyo del Estado sino de toda la sociedad civil.

Con todo lo dicho se presenta a la academia un gran reto y más en un momento en el que la esperanza de un cese al conflicto entre las FARC-EP y el Estado está cerca de firmarse; esperanza de paz que no debe aminorar los derechos de las víctimas, las cuales tampoco se deben entender como el enemigo fehaciente, sino como la piedra angular que legitima el futuro del posconflicto. Este es un elemento que permitiría a los futuros acuerdos de La Habana pasar la lupa de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la

56 Tener en cuenta lo dicho por los profesores Larosa y Mejía (2014).

57 Multiplicidad de actores en el conflicto, ver más en el capítulo uno del *Informe Basta Ya* (Sánchez, 2014).

58 En el Registro Único de Víctimas, realizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), hay cerca de 7 millones de personas registradas como tales.

cual la amnistía es totalmente inconventional y fuera de derecho<sup>59</sup>. Igualmente, la acreditación idónea de que las víctimas encontraron por parte del Estado la satisfacción plena de sus derechos se convierte en un aporte fundamental para el posconflicto.

Dicho lo anterior, por su importancia y con la finalidad de generar directrices de mayor validez sobre este tema, se expondrán los avances mexicanos en la materia, por lo cual el objeto de estudio de esta investigación consiste en analizar la adecuada inclusión de las víctimas en el posconflicto para una paz duradera a partir de los insumos teóricos obtenidos del estudio de las fuentes secundarias en materia de víctimas tanto en Colombia como en México.

## El conflicto

Para entender el papel de las víctimas en un eventual posconflicto es necesario comprender las circunstancias por las cuales esas personas fueron violentadas en su dignidad, siendo el conflicto interno de Colombia la fuente principal de dichas agresiones. De esta manera, es menester definir esta figura social, para lo cual se debe establecer, en primer lugar, que el conflicto es connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir (Vinyamata, 2001); es un proceso interactivo que se da en un contexto determinado, debido a que es una construcción social y una creación humana (Fisas, 2001), donde los actores que interactúan en él, en consecuencia, modifican sus conductas, toman nuevas decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos que integran su poder y, a menudo, llegan a ampliar, reducir, separar o fusionar sus objetivos (Entelman, 2002). En síntesis, este conflicto se refiere a la violencia armada en la que se enfrentan grupos de varias índoles, tales como fuerzas militares, guerrillas, paramilitares, comunidades religiosas o étnicas, empleando armas u otros métodos destructivos (Díaz, 2015). Ahora bien, Berdal y Malone dividen las causas del conflicto en dos categorías importantes: conflictos sociopolíticos y conflictos de identidad<sup>60</sup>;

59 Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía (Corte IDH, 2006, p. 154).

60 La primera clasificación explica el conflicto según el punto de vista de la política y de la economía, afirmando que las razones sociopolíticas juegan un papel importante en el contexto de las causas para la reaparición del

en el caso colombiano, el conflicto armado interno ha tenido una mutación considerable, evidenciada desde sus orígenes, pues en esa época era una pugna social que buscaba la igualdad; en la actualidad, el conflicto colombiano es una lucha por intereses económicos y políticos sin coherencia ideológica, dejando de lado los intereses de las masas para convertirse en lucha por el poder, enfrentamiento considerado como el más antiguo del continente americano y uno de los más sangrientos<sup>61</sup>.

Con el fin de un conflicto armado no llega la paz como consecuencia inmediata de los acuerdos con grupos insurgentes tras periodos de violencia (Monroy, 2013, p. 1), pues es necesario entender que una sociedad como la colombiana, en constante cambio y en plena formación institucional traerá consigo incontables controversias por el tipo de Gobierno que se pretenda establecer, sin olvidar la naturaleza misma del hombre que, al estar en una comunidad, siempre a causa de la interacción propia de ella surgirán choques entre los asociados, los cuales según su manejo determinarán si una sociedad puede tener determinado grado de desarrollo en momentos de paz.

Con todo ello, y para la finalidad de este escrito, podemos definir a este conflicto como la confrontación de varios actores con intereses diversos y antagónicos: algunos por la obtención del poder político y económico, otros para generar temor en la sociedad y, por último, los representantes del Estado.

En Colombia<sup>62</sup>, después de la Constitución de 1991, la creación de la Corte Constitucional como tribunal de gran importancia para el ordenamiento nacional, dado que sus sentencias y sus precedentes generan grandes avances en la interpretación del derecho (pretoriana) del conflicto, resulta trascendente para esta investigación. Por ello, dentro de la jurisprudencia misma de esta corporación se encuentra el estudio sobre el conflicto en este país, aportando para ello las nociones tanto de tipo histórico como social e incluso de tipo económico de esta figura, donde esta corporación manifiesta que el esfuerzo económico que hemos hecho en defensa no se ha realizado ni en educación ni en salud, ni en

---

conflicto. Por el contrario, Collier sugiere que las principales causas del resurgimiento de un conflicto se basan en la identidad (Filipov, 2008, p. 17).

61 Ver *Informe Basta ya* del Centro Nacional de Memoria Histórica (Sánchez, 2014).

62 Para llevar a cabo un análisis objetivo de este concepto, es importante tener en cuenta la diversidad de actores que han influido históricamente, desde sus inicios hasta la actualidad.

vivienda, ni en empleo, etc. (Sentencia C-802 de 2002). Respecto al tema, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-781 ha manifestado:

En consecuencia, la determinación de la existencia de un conflicto armado debe realizarse no en abstracto, sino en atención a las características de cada caso particular. Para efectos de establecer en casos concretos si un determinado conflicto ha trascendido el umbral de gravedad necesario para ser clasificado como un conflicto armado interno, la jurisprudencia internacional ha recurrido principalmente a dos criterios: (i) la intensidad del conflicto, y (ii) el nivel de organización de las partes. Al apreciar la intensidad de un determinado conflicto, las cortes internacionales han aplicado, por ejemplo, factores tales como la seriedad de los ataques y si ha habido un incremento en las confrontaciones armadas, la extensión de las hostilidades a lo largo de un territorio y de un periodo de tiempo, el aumento en las fuerzas armadas estatales y en su movilización, así como la movilidad y distribución de armas de las distintas partes enfrentadas. En cuanto a la organización de los grupos enfrentados, las cortes internacionales la han apreciado de conformidad con criterios tales como la existencia de cuarteles, zonas designadas de operación, y la capacidad de procurar, transportar y distribuir armas.

Del extracto anterior se puede establecer que el conflicto colombiano es particular e intenso debido a su complejidad, donde los participantes en él se están adecuando al momento histórico que viven, por lo cual la sociedad colombiana se desarrolla inmersa en los enfrentamientos; metamorfosis en la que el factor económico es protagonista, pues los actores insurgentes se adaptan al narcotráfico<sup>63</sup> buscando el soporte económico para poder establecer parámetros de equilibrio al momento de combatir al Gobierno y a la población civil, generando de este modo que la insurgencia y el Estado entren en un tipo de conflicto fuerte e interminable. Tanto así que el conflicto colombiano cumple con los estándares establecidos por la jurisprudencia internacional para ser considerado como un conflicto interno de gran importancia, dado que los actores intervinientes en él están muy bien organizados, produciendo por ello un conflicto diferenciado que desgarrar la dignidad de toda una nación, que olvida las graves violaciones a las que fueron sometidos sus compatriotas.

En este sentido, esta corporación ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el conflicto particular que se presenta en Colombia:

63 Cabe resaltar que la búsqueda de nuevos recursos económicos para financiar la insurgencia ha encontrado nuevas fuentes como es el caso de la minería criminal de naturaleza ilegal.

Antes de ilustrar cómo ha operado esa concepción amplia de conflicto armado, resalta la Corte Constitucional que una noción estrecha de conflicto armado en la que se lo limita a un conjunto específico de acciones y actores armados, lo caracteriza por el uso de ciertas armas y medios de guerra, o lo circunscribe a áreas geográficas específicas, vulnera los derechos de las víctimas, pero también reduce las posibilidades de cumplimiento del deber de prevención, atención y protección que deben brindar las autoridades a todos los habitantes del territorio colombiano frente a actos violentos y reduce la capacidad de las autoridades militares y de policía para enfrentar este fenómeno, así como las posibilidades de las autoridades judiciales de sancionar a los victimarios (Sentencia C-781 de 2012).

Es importante describir que el conflicto colombiano no se encuentra solamente focalizado en el sector rural donde surgió en primera instancia, sino en todo el territorio nacional; incluso ha llegado a manifestarse en los sectores urbanos<sup>64</sup>, no en las mismas dimensiones que en el campo, pero está latente en la sociedad colombiana.

## Las víctimas

Es factible concluir que la concepción teórica del conflicto colombiano demuestra de forma fácil su gran complejidad, tanto así que toda la población civil puede ser afectada dada la multiplicidad de actores que, como se dijo, intervienen produciendo una gran masa de víctimas (como el caso de El Salado, en Bolívar); por ello las víctimas en Colombia, así como el conflicto mismo, tienen un nivel de complejidad alto que amerita ser estudiado.

Por consiguiente, de cualquier conflicto armado, ya sea de carácter internacional o no internacional<sup>65</sup>, siempre existirán personas que sin tener ningún tipo de interés en ese enfrentamiento resultan ser afectadas —en sus derechos— en ocasión de este; razón por la cual son catalogados como víctimas<sup>66</sup>. Para comprender la dimensión de estos daños es necesario remitirnos a los pronunciamientos

64 Para mayor información, tener en cuenta que el microtráfico, junto con la extorsión y, en algunos casos, las asonadas son ejecutados por la insurgencia.

65 Artículos segundo y tercero comunes a los cuatro convenios de Ginebra de 1949.

66 Que para el derecho internacional humanitario son entendidas como toda persona que en medio de un conflicto armado no participa en ninguno de los bandos combatientes, convirtiéndose de ese modo en una persona civil a la cual no se le pueden vulnerar sus derechos durante dicho conflicto.

de las Naciones Unidas cuando señala que dichas agresiones son de carácter físico, psicológico o patrimonial.

Ahora bien, fundamentados en el desarrollo legislativo mexicano como catalizador de las disposiciones internacionales podemos entender que víctima no es solamente aquella persona que, *prima facie*, sufre esas agresiones, sino todas aquellas que indirectamente y por la relación que tenían con la víctima son consideradas como tales; por ende, la calidad de víctima puede ser otorgada de manera particular o colectiva, esto último cuando fueron afectadas por una misma conducta, o cuando, debido a las relaciones que se presentan dentro de una comunidad, el simple hecho de que sean violentados los derechos de una de ellas genera igualmente afectaciones graves a esa comunidad como es el caso de los grupos étnicos. Todo este desarrollo teórico dio sus frutos en el ordenamiento jurídico colombiano en el artículo segundo de la Ley 1448 del 2011 (llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) donde se estableció que víctimas son:

...aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos (DDHH), ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Actualmente, según los informes emitidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en Colombia existen alrededor de 7.558.854 víctimas registradas, de las cuales 7.327.186 lo son del conflicto armado; de estas, 5.940.035 son sujetos de atención y 1.387.151 son víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no aptas de atención<sup>67</sup>. Bajo estas importantes cifras de personas que individual o colectivamente ha sido objeto de constantes violaciones de derechos humanos y de lo enmarcado dentro del DIH, el derecho internacional toma un papel muy importante a la hora de buscar las medidas de protección de estos derechos, principalmente a través de los regímenes internacionales<sup>68</sup>, los cuales, como lo explica el autor en materia de

67 Para mayor información, visitar la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

68 Los regímenes internacionales se han convertido en importantes instrumentos de regulación de problemas transfronterizos y en un nuevo centro de gravedad en la teoría de las relaciones internacionales (Messner, 2001, p. 60). Los regímenes internacionales están compuestos por normas jurídicas, políticas y morales. La norma

defensa de los DDHH, están soportados en la convicción de respetar y garantizar las condiciones de vida de la persona, una dignidad humana que se ha reconocido en un proceso histórico y, además, refleja el estándar moral de la humanidad, citando al profesor Brown (Valdivieso, 2012, p. 624); estos son de vital importancia gracias a su poder coercitivo y sancionatorio para garantizar la efectividad de las medidas de protección.

El régimen internacional sobre derechos humanos consagra toda una normatividad en diferentes ámbitos (regional y global)<sup>69</sup> que constituye mecanismos de control, protección y sanción a las violaciones de estos derechos (Valdivieso, 2012, p. 624). La materialización de estos mecanismos se vio ampliamente reflejada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>70</sup>, por medio del cual el Estado se obliga a asegurar la protección del individuo de sus excesos y las víctimas de violaciones de los derechos civiles y políticos, a quienes el Estado no ha garantizado satisfactoriamente el goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pueden interponer quejas ante el Comité de Derechos Humanos (p. 624).

## Derechos de las víctimas

Todos los avances anteriormente relatados tienen un mismo origen, pues desde el fin de la Segunda Guerra Mundial la relación entre el Estado y los asociados cambió radicalmente dado que la comunidad internacional, al establecer una nueva empresa encaminada al respeto por la dignidad humana como valor imperante para todos los Estados, creó una obligación primordial para todos ellos, en la cual deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos a cada una de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de esos Estados, tal y como lo

---

jurídica es una regla de obligatoriedad general, formal y determinante. Además, es una medida vinculante, que establece sus sanciones jurídicas en atención a su carácter coercitivo (Terz, 2001, pp. 75-103).

69 En el ámbito global, el principal instrumento es la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que fue adoptada en 1948 en la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y desarrollada mediante la creación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

70 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49, lista de los Estados que han ratificado el pacto.



manifiesta la Carta de San Francisco de 1948, que guarda estrecha relación con la Convención Americana de Derechos Humanos:

Nosotros el pueblo de las Naciones Unidas resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, (Nota introductoria) en este sentido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice: que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana (Carta de San Francisco, 1948, Preámbulo).

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a nivel regional:

...consagró en su artículo primero como obligación fundamental de todo Estado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; quedando totalmente fundamentada en instrumentos jurídicos internacionales la obligación principal de todo Estado (CADH, 1969, art. 1).

Ahora bien, la dificultad que tienen los Estados para cumplir con esta obligación en la práctica es una realidad, y más aún en el contexto colombiano donde se está ante múltiples conflictos que constantemente vulneran los derechos de las personas<sup>71</sup>, creando de esta manera un deber secular a estos Estados donde una vez generada la violación, es necesario propender a salvaguardar los derechos de las víctimas, los cuales son el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

### *Derecho a la verdad<sup>72</sup>*

El derecho a la verdad ha sido considerado como complemento o como una opción complementaria a los juicios criminales para conseguir el reconocimiento

71 Ver *Informe Basta ya* (Sánchez, 2014).

72 En los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en el Protocolo I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, figuran indicios del ámbito de aplicación material del derecho a la verdad. Por lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos, respecto de las cuales se plantea la cuestión del derecho a la verdad, los órganos internacionales de derechos humanos han reconocido ese derecho en los casos de violaciones manifiestas, en particular las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, y también en los casos de infracciones graves del derecho internacional humanitario.

de las víctimas y obtener una narrativa de las pasadas violaciones de los derechos humanos (Cortés, 2007, p. 8), como también el derecho de las víctimas a conocer realmente lo que pasó y la razón por la cual ocurrió (Díaz, 2014, p. 9). Para garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho inalienable dentro de un marco de justicia transicional, es el Estado el que debe garantizar a la víctima, sus representantes y abogados el derecho y acceso a la información, con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regular en el manejo de información confidencial<sup>73</sup>.

La Corte Constitucional, en referencia a este derecho, ha manifestado que la posibilidad de conocer lo que sucedió y de buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real (Sentencia C-228 de 2002) es la finalidad de este; esa corporación recalca que dicha posibilidad es complementada con otros derechos, los cuales son:

- *El derecho inalienable a la verdad*: conforma el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes.
- *El deber de recordar*: consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado.
- *El derecho de las víctimas a saber*: determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima (Sentencia C-370 de 2006).

Este tipo de derecho de fuente pretoriana en el seno de la Corte ha desarrollado múltiples insumos teóricos que complementan su noción, de este modo su origen está fuertemente ligado a la dignidad humana como imperativo universal, por lo cual es inalienable; asimismo, tiene dos tipos de alcance, uno individual y otro colectivo, en el primero se busca que la víctima, la persona directamente afectada por la vulneración, y sus familiares o parientes tengan conocimiento de

73 Ver artículo 23, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

los autores de la conducta criminal, la motivación y la delimitación espacial de esas circunstancias, comprendiendo al mismo tiempo el contexto dentro del cual se desarrollaron dichas violaciones; en el segundo se busca lograr que la sociedad conozca la realidad de lo sucedido como fomento de la memoria histórica, evidenciándose su estrecha relación con los derechos a la justicia y la reparación<sup>74</sup>; ahora bien, para la materialización de este derecho la Corte ha establecido:

Las medidas apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que complementen la función del poder judicial. Las sociedades que han experimentado crímenes odiosos perpetrados en forma masiva o sistemática pueden beneficiarse en particular con la creación de una comisión de la verdad u otra comisión de investigación con objeto de establecer los hechos relativos a esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la desaparición de pruebas. Sea que un Estado establezca o no un órgano de ese tipo, debe garantizar la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los Derechos Humanos y el derecho humanitario y la posibilidad de consultarlos (Sentencia C-616 de 2014).

### *Derecho a la justicia*

Toda víctima tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz para lograr que su ofensor sea juzgado, que el hecho no quede en la impunidad y que el daño sea reparado (Díaz, 2014, p. 11); por ello, el acceso a la justicia es una característica fundamental que demuestra la plena garantía que tienen los derechos humanos en los Estados, pues su protección solo se evidencia cuando son amparados en los momentos que necesitan de dicha tutela y esto ocurre después de haber sufrido algún tipo de violación (Méndez, 2000, p. 2). Ahora bien, según lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano<sup>75</sup>, es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones<sup>76</sup>, la identificación de los responsables y su respectiva sanción.

Como avance jurisprudencial se ha establecido su implicación en el sentido de que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose

74 Para mayor información ver las sentencias C-715 de 2012 y C-099 de 2013.

75 Ley 1448 de 2011 en su artículo 4 y Ley 975 de 2005 en su artículo 6.

76 Dichas violaciones contempladas dentro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en su artículo 3, párrafos 1 al 5.

de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación (Sentencia C-616 de 2014), el fin consiste en que no haya impunidad (Sentencia C-871 de 2003), implicando una serie de obligaciones a las autoridades estatales, como lo son: i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, y iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso (Sentencia C-454 de 2006), cumpliendo de esta forma las directrices macro contenidas en este derecho: i) la de investigar las violaciones, ii) perseguir a sus autores y iii) si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción (Sentencia C-370 de 2006).

### *Derecho a la reparación integral*

La reparación integral (en adelante RI) de las personas que por los insumos teóricos anteriormente señalados obtienen la calidad de víctimas tras la existencia de constantes violaciones de los derechos humanos, específicamente en un marco de conflicto armado, pues al producirse dicha vulneración estas víctimas sufren graves vejámenes produciendo un sinnúmero de daños, consiste en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas (Rousset, 2011, p. 63); por ello es necesario aclarar que en función de lo dicho por la Corte Interamericana, se debe buscar en primer lugar la plena reparación con el fin de dejar a la víctima en las condiciones que tenía antes de sufrir esos daños<sup>77</sup>; pero como en muchos casos esto es imposible, se hace indispensable mejorar la situación actual de esas personas esforzándose al máximo por alcanzar su plena satisfacción, por lo cual se deben utilizar múltiples medidas aplicadas integralmente para este objetivo, como se muestra a continuación<sup>78</sup>.

77 Véase artículo tercero Ley 1448 del 2011.

78 Para mayor información, el derecho a la reparación integral comprende la adopción de medidas *individuales* relativas al derecho i) a la restitución, ii) a la indemnización, iii) a la rehabilitación, iv) a la satisfacción y v) a la garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas (Sentencia C-616 de 2014).

### Indemnización

Esta medida también puede ser llamada como reparación por equivalencia en dinero (Becerra, 2012, p. 52), por lo cual dicho concepto comprende a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano, incluyendo a los padres, hijos y hermanos que podrían tener derecho a indemnización (Corte IDH, 2004, Caso Molina Theissen vs. Guatemala); cabe aclarar que el derecho a la indemnización por los daños sufridos por las víctimas hasta el momento de su muerte se transmite por sucesión a sus herederos, y que es una regla común en la mayoría de las legislaciones que los sucesores de una persona son sus hijos (Corte IDH, 2005, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú).

### Restitución

La plena restitución consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron (Corte IDH, 2014, Caso Tarazona Arrieta y Otros vs. Perú). Para su cumplimiento el Estado deberá ejecutar las medidas de restitución, el pago de las indemnizaciones compensatorias, el reintegro de honorarios y costas, y la adopción de las otras medidas ordenadas dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de esta sentencia (Corte IDH, 1998, Caso Loayza Tamayo vs. Perú); por esta razón, la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (*restitutio in integrum*), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior (Corte IDH, 2005, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia).

### Rehabilitación

De manera preliminar, las medidas de reparación no se centran exclusivamente en medidas de rehabilitación de tipo médico, sino que se incluyen medidas que ayuden a la persona con discapacidad a afrontar las barreras o limitaciones impuestas, con el fin de que dicha persona pueda “lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida” (Corte IDH, 2012, Caso Furlan

y Familiares vs. Argentina); en este sentido, la reparación relativa a la medida de rehabilitación constituye una reparación suficiente y adecuada para compensar la afectación sufrida en su integridad personal (Corte IDH, 2015, Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú), una rehabilitación especializada de carácter médico, psicológico o psiquiátrico dirigida a reparar este tipo de violaciones (Corte IDH, 2014, Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú).

#### Garantías de no repetición

La promoción de acciones tendientes a las garantías de no repetición de los hechos de violencia, lo cual se logra con la eficaz acción preventiva del Estado (Chavarría, 2012, p. 233). Para garantizar la no repetición se requiere poner en práctica medidas y reformas sociales e institucionales para que los abusos del pasado no se repitan (Louise, 2013, p. 48).

#### Patrimonio familiar

Para comprender este tipo de medidas creadas en el seno de la Corte IDH nos remitiremos a un caso específico, el Caso Baldeón García Vs. Perú, en el cual se evidencia que el desplazamiento, los traslados de vivienda, los cambios de trabajo, así como las otras manifestaciones de la grave inestabilidad a la que la familia Baldeón García se ha visto sujeta desde 1990, impactaron seriamente el patrimonio familiar (Corte IDH, 2006, Caso Baldeón García vs. Perú). En otro caso,

La Corte considera que las pretensiones de reparaciones planteadas por los representantes se ajustan al marco fáctico indicado por la Comisión en su demanda, con la excepción de la supuesta pérdida de derechos posesorios sobre una finca de propiedad de la víctima, así como la quema de la cosecha de café de la misma, que los representantes alegan para fundar una parte del daño al patrimonio familiar (Corte IDH, 2008, Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá)

Esta Corte ha establecido que la indemnización por concepto de pérdida de ingresos comprende los ingresos que habría percibido la víctima fallecida durante su vida probable. Ese monto corresponde al patrimonio de la víctima fallecida, el cual será entregado a sus familiares (Corte IDH, 2008, Caso Ticona Estrada y Otros vs. Bolivia).

### Proyecto de vida

Las decisiones de la persona están dirigidas a “hacer su vida” dentro del marco de su “proyecto de vida”. Toda persona, consciente o inconscientemente, tiene un “proyecto de vida”, por elemental que sea, el cual responde a una decisión libre y radical, dentro del marco de los condicionamientos que le son inherentes. Las otras múltiples y permanentes decisiones de la persona, por coyunturales o inmediatas que fuesen, adquieren sentido y coherencia en cuanto están destinadas, de manera directa o indirecta, a dar cumplimiento al “proyecto de vida”. Frente a este, en singular, el ser humano va generando permanentemente microproyectos que confluyen en él (Fernández, 2003, p. 6)

### Medidas tradicionales (daño emergente y lucro cesante)

En la apelación a estas medidas siempre se deben tener en cuenta como directriz orientadora los principios de integralidad donde se supone que las víctimas sean sujetos de reparaciones de diferente naturaleza, que respondan a los distintos tipos de afectación que hayan sufrido, lo cual implica que estas diferentes reparaciones no son excluyentes ni exclusivas (Sentencia C-805 de 2002), y el principio de proporcionalidad donde se aduce que la reparación a las víctimas debe estar en consonancia con la altura del impacto de las violaciones de los derechos humanos (Sentencia C-616 de 2014).

### El posconflicto

Para establecer una paz duradera, los derechos de las víctimas deben ser cumplidos a cabalidad, y sobre todo materializados en la práctica, a través de políticas públicas de inclusión donde se comprendan a las víctimas no como una población dependiente de este, sino como un sector de inversión y retribución. Para aplicar estas políticas es indispensable entender el contexto en el cual se van a ejecutar. Por ello, el posconflicto sería una etapa de construcción de un nuevo Estado, en el cual se solventen los problemas que han originado y prolongado el conflicto colombiano. Sin embargo, este nuevo Estado no se debe consolidar a través de una relación de ganadores y vencidos, generando una ruptura en el camino hacia la paz, sino más bien mediante una memoria histórica cuyo ingrediente principal

es no olvidar para no repetir; en consecuencia, para el país la particularidad de su conflicto (por el hecho de tener diversos actores) demanda unas garantías de inclusión en el ámbito democrático establecido constitucionalmente, pensando en la restauración de toda la sociedad enfocada en principios de igualdad, perdón, justicia, verdad, inclusión, reparación y no repetición.

La complejidad del mundo implica que lo que sucede en una nación involucrará al mismo tiempo a toda la comunidad internacional, al igual que las políticas que se promulgan desde esta esfera deben ser también acopladas por las naciones. Por ello, desde la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, la obtención de la paz duradera en situaciones de posconflicto ha estado en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de muchos países, ya que el número de conflictos internos ha crecido. En la cumbre mundial celebrada en 2005, la ONU decidió crear una comisión con la finalidad de la construcción de la paz, la cual se inauguró oficialmente el 23 de junio de 2006. Esta comisión es la encargada de sugerir estrategias para lograr la paz y que esta se mantenga y no haya una recaída en los conflictos. Desde su creación, la ONU ha participado en varias misiones para lograr la paz en conflictos. El relativo éxito de algunas de las misiones (Bosnia-Herzegovina, Kosovo, El Salvador) contrasta con los esfuerzos fallidos en ciertos países (Sierra Leona, Ruanda, Colombia), y de allí surge la pregunta por la efectividad de las estrategias para lograr la paz; es de gran importancia por este precedente la participación de la comunidad internacional para el posconflicto en Colombia, no solo por su apoyo, sino por el hecho de utilizar los mecanismo que en otros países han sido efectivos para la consolidación de una sociedad en paz, teniendo siempre en cuenta que la sociedad colombiana es muy particular y necesita una adecuación de esos mecanismos para que en la práctica se puedan materializar sus efectos<sup>79</sup>.

## Justicia transicional

Los procesos de justicia transicional mediante los cuales se consolidan los nuevos Estados —que se realizan en los contextos de posconflicto— tienen por objeto

---

79 Christian Völkel, analista para Colombia del International Crisis Group, lo resumió aduciendo que “la experiencia internacional y regional puede servir, aunque de ahí no va salir la solución para Colombia”. Probablemente de la experiencia internacional “se pueden sustraer lecciones y cosas útiles” pero, en últimas, “cada país debe buscar su propio modelo de transición” hacia la normalización.



restablecer las condiciones naturales de las instituciones estatales, camino de la verdad, la justicia y la reparación. En rigor, no constituyen un tipo especial de justicia, sino un sistema de justicia adecuado a sociedades en las que han ocurrido violaciones sistemáticas de los derechos humanos (Plata, 2011, p. 50). Para la justicia transicional son dos los objetivos que se deben tener en procesos de transición a la paz<sup>80</sup>:

- Esclarecimiento de los hechos y determinación de responsabilidades.
- Reparación integral de las víctimas.

Por ende, es en estos procesos donde se necesita de un esfuerzo mancomunado en el que la sociedad entera participe activamente en la consolidación de un tejido social adecuado para hacer del posconflicto una realidad, y en este esfuerzo colectivo no se puede descartar la ayuda a las víctimas a través de políticas de inclusión, a fin de que puedan ser un motor ideal para la puesta en marcha de la justicia transicional, pues con la inclusión se rompen barreras de desigualdad.

### **Demandas regionales para el posconflicto**

Ya hemos hablado de la complejidad del conflicto que sufre Colombia, el cual ha producido un sinnúmero de víctimas que son acreedoras de los derechos de la verdad, la justicia y la reparación, derechos que deben ser materializados por el Estado ante la impotencia y, en algunos momentos, negligencia de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de cada una de las personas sujetas a su jurisdicción, y como deben ser garantizados en un posconflicto; sin embargo, como lo manifiesta el profesor Abuchaibe (2011), es necesario indicar que por el solo hecho de establecer un posconflicto con su respectiva justicia transicional<sup>81</sup> no se cierran las puertas a los organismos internacionales y regionales para que inicien investigaciones a fin de determinar responsabilidades en las graves

80 Véase Plata (2008).

81 La justicia transicional es una parte importante de un desarrollo político más amplio en la historia internacional reciente. Así, en la fase I, la justicia transicional se apegó a la exigencia de hacer cumplir los derechos jurídicos asociados con los ideales liberales del Estado de derecho. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, esas suposiciones normativas fueron desafiadas y surgieron tendencias similares tanto en la justicia transicional como en la más amplia discusión sobre el concepto de Estado de derecho. Del mismo modo que los desafíos posmodernos generalmente son más conducentes a generar críticas que estrategias prácticas, el modelo contemporáneo de justicia transicional, al distanciarse del discurso universalizador del Estado de derecho, representa una respuesta crítica limitada. El método genealógico no es la excepción a lo anterior: produce ciclos críticos continuos, en vez de una historia progresiva de la justicia transicional (Teitel, 2003, p. 27).

violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como se salvaría el Estado colombiano de sufrir las condenas por parte de la Corte IDH por su acción u omisión en la comisión de dichas conductas. En este sentido, la Corte IDH, en referencia a los procesos de paz, ha manifestado que no se puede ser benevolente<sup>82</sup> con los autores de graves violaciones de los derechos humanos y del DIH, pues se debe garantizar el cumplimiento de los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dado que:

Impiden la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos y, consecuentemente, el acceso de las víctimas y sus familiares a la verdad de lo ocurrido y a las reparaciones correspondientes, obstaculizando así el pleno, oportuno y efectivo imperio de la justicia en los casos pertinentes, favoreciendo, en cambio, la impunidad y la arbitrariedad, afectando además seriamente el Estado de derecho (Corte IDH, 2011, Caso Gelman vs. Uruguay).

Pero la Corte IDH no es arbitraria al momento de estudiar los casos de transición a la paz o a una verdadera democracia, y determina los parámetros para lograr en contextos de justicia transicional su efectiva aplicación, exponiendo que en dicho contexto los Estados, ante la abrumadora reparación que deben realizar a las innumerables víctimas, que excede ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunales internos, los programas administrativos de reparación constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación<sup>83</sup> (Corte IDH, 2010, Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de

82 Las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos alegados por algunos Estados para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. Este Tribunal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de las Naciones Unidas y otros organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos se han pronunciado sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de los Estados (Corte IDH, 2010, Caso Gomes Lund y otros; *Guerrilha do Araguaia vs. Brasil*).

83 En esos contextos, esas medidas de reparación deben entenderse en conjunto con otras medidas de verdad y justicia, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos relacionados, entre otros, con su legitimidad —en especial, a partir de la consulta y participación de las víctimas—; su adopción de buena fe; el nivel de inclusión social que permiten; la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas pecuniarias; el tipo de razones que se esgrimen para hacer reparaciones por grupo familiar y no en forma individual; el tipo de criterios de distribución entre miembros de una familia (órdenes sucesorales o porcentajes); parámetros para una justa distribución que tenga en cuenta la posición de las mujeres entre los miembros de la familia u otros aspectos diferenciales tales como si existe propiedad colectiva de la tierra o de otros medios de producción.

la Cuenca del Río Cacarica [Operación Génesis] vs. Colombia)<sup>84</sup>, posibilitando la aceptación de procesos de paz con el debido tratamiento a las víctimas.

Por todas estas demandas, los negociadores necesitan llegar a un acuerdo sobre las líneas generales de un régimen de justicia transicional viable jurídica, política y administrativamente para defender los derechos de las víctimas (Crisis Group, 2013, p. 57), proceso que debe tener un enfoque de derechos humanos y DIH, puesto que estos son normativas que indican un protocolo a la hora de restituir los derechos de las víctimas del conflicto armado y resarcir en gran parte los daños ocasionados (Combata, Delgadillo y Torres, 2013, p. 36), sin olvidar la obligación que el Estado tiene de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas conductas. Como se ha venido reiterando a lo largo de este acápite, investigar y juzgar nunca irá en contra de un proceso de paz, pues se quiere establecer responsabilidad y esclarecer la verdad de las víctimas; en un contexto garantista todas las personas merecen el respeto de unos mínimos fundamentales para la dignificación, y al momento de establecer las penas se debe lograr mediar entre la paz y la no impunidad, pero resalta lograr que con dichas sanciones las víctimas se sientan satisfechas, no en sentido subjetivo de percepción, sino a través de un discernimiento objetivo de esas circunstancias para determinar si con ello se mejoran sus condiciones.

### Marco jurídico en materia de víctimas en México

México es uno de los países que regionalmente ha armonizado su legislación con las demandas regionales de protección a los derechos humanos; sin embargo, atraviesa desde hace tiempo un fuerte incremento de violencia que, por desgracia, va en aumento, esencialmente por la lucha desatada entre los carteles del crimen organizado y el Estado, lo que ha originado también que gran parte de la población civil se convierta en víctimas colaterales. De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el 30 de abril de 2015 las personas desaparecidas en México sumaban 25.955; por estas razones, analizar el avance jurídico que en este país se ha dado para la atención de las víctimas permitirá evaluar objetivamente los

84 Ha reiterado que la jurisprudencia del sistema interamericano ha establecido en diversas ocasiones que las víctimas de violaciones graves perpetradas durante el conflicto armado tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretizarse mediante medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición (CIDH, 2008, p. 1).

avances colombianos, acompañados estos preceptos por lo que ya se ha expuesto en párrafos anteriores de los requerimientos regionales promulgados en materia de víctimas.

El 9 de enero de 2013 fue publicada en el *Diario oficial* de la Federación la Ley General de Víctimas (LGV), la cual entró en vigor treinta días después, además de expedirse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que entró en vigor el reglamento respectivo, incluyendo que dentro del plazo de 180 días, los congresos de los estados del país tenían la obligación de armonizar todos los ordenamientos locales relacionados con la LGV.

### *Géneros de víctimas*

La LGV, en su artículo 4, establece dos tipos de víctimas: las directas, que son aquellas personas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y las indirectas, que son los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima y toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a una víctima.

### *Calidad de víctima*

El inciso cuarto del mencionado artículo 4 de la LGV manifiesta la adquisición de la calidad de víctima con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos, e independientemente de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño, o de su participación en algún procedimiento judicial o administrativo.

### *Reparación integral*

En el artículo primero de esta normatividad se determina que la reparación integral está comprendida por las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a

favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

### *Objeto de la Ley General de Víctimas*

Dentro de todo el articulado de esta legislación sobre víctimas se consagran los objetivos propios, entre los cuales se encuentra el estipulado en el numeral primero del artículo segundo, ratificado en el artículo 114 numeral dos, que busca reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.

Por otra parte, en el numeral segundo del artículo en mención se señala que se deben establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral.

Asimismo, en el numeral tercero se determina que otro de los objetos de la ley busca garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso.

Por último, en los numerales cuarto y quinto se sanciona como objetos de esa normatividad el establecer los deberes y las obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; además de consagrar las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones, respectivamente.

### *Principio pro homine*

Al estudiar estas disposiciones legislativas no se puede pasar por alto que en su artículo tercero se obliga a que la LGV deberá interpretarse de conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos,

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

### *Violación de derechos humanos*

El numeral diecinueve del artículo sexto de la LGV precisa a este concepto como

...todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente.

### *Derechos que prevé la Ley General de Víctimas*

Entre los derechos que en forma general establece la LGV en el título segundo de su articulado, se contemplan otros de forma específica, por ejemplo, los derechos de las víctimas en el proceso penal consagrados en el capítulo cuarto del título segundo de esta legislación, como son:

- a. Derecho a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, del personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de la LGV, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas.
- b. Derecho a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante con independencia del lugar donde ella se encuentre; así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a un nuevo trauma. Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces.
- c. Las víctimas, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole, tienen derecho a la protección del Estado, incluido su bienestar físico y psicológico, y la seguridad de su entorno, con respeto a su dignidad y privacidad. Lo anterior incluye el

derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como el derecho a contar ella y sus familiares con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima o del ejercicio de sus derechos.

- d. Derecho a solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la LGV.
- e. Derecho a obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre estos, los documentos de identificación y las visas.
- f. Derecho a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente.
- g. Derecho a ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva, cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie.
- h. Derecho a la notificación de las resoluciones que se dicten en el sistema relativas a las solicitudes de ingreso y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral.
- i. Derecho a que su consulado sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras.
- j. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su núcleo familiar esté dividido.
- k. Derecho a retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.
- l. Derecho a participar en la formulación, la implementación y el seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral.
- m. Derecho a que las políticas públicas que son implementadas con base en la LGV tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y la población indígena.

- n. Derecho a no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos, salvo en los casos expresamente señalados en la LGV.
- o. Derecho a recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad.
- p. Derecho a acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos.
- q. Derecho a tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos; derecho a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, la captura, el procesamiento y la sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño.
- r. Derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la LGV.
- s. Derecho a expresar libremente sus opiniones y preocupaciones ante las autoridades e instancias correspondientes, y a que estas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses.
- t. Derecho a que se les otorgue, en los casos que procedan, la ayuda provisional/humanitaria.
- u. Derecho a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no hablen el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual.

### **Dimensión de protección de los derechos humanos**

A partir del espíritu propio de la LGV, la violación de los derechos humanos se puede contemplar desde dos perspectivas: una de carácter subjetivo, que se refiere a los eventos adversos que sufren las víctimas, y otro de carácter objetivo, que representa los intereses de toda la sociedad.

Esta doble dimensión exige que el halo protector de la tutela judicial se amplíe no solo a las víctimas directas e indirectas, sino al resto de los seres humanos que conforman la sociedad, “por la necesidad de prevenir que en el futuro los



derechos que aquí fueron vulnerados sigan siendo desconocidos para otras personas; el principal objetivo es la prevención, la no repetición” (Serrano y Vázquez, 2013, p. 12).

### *Dimensión subjetiva*

Este concepto se desarrolla esencialmente bajo el principio de interdependencia, porque no solo repercute la violación de diversos derechos humanos en la víctima directa, sino en las indirectas; por ejemplo, si un padre es privado de su libertad, ello repercute en sus hijos quienes serán despojados de diversos derechos como los de conveniencia, alimentos, cuidado y protección.

### *El principio de interdependencia*

Este principio puede enfocarse desde dos ángulos, los derechos de una persona interrelacionados entre sí y los derechos de otras personas vinculados con la víctima directa.

Interdependencia e indivisibilidad: que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente<sup>85</sup>.

Los derechos humanos son interdependientes en tanto que establecen relaciones recíprocas entre ellos. La interdependencia señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos. La interdependencia comprende, por lo menos, un par de relaciones donde: a) un derecho depende de otro(s) derecho(s) para existir, y b) dos derechos (o grupos de derechos) son mutuamente dependientes para su realización. En este sentido, el respeto, garantía, protección y promoción de un derecho tendrá impacto en los otros o viceversa. De tal forma, la protección del derecho a la salud no puede quedar al margen de una revisión de otros derechos condicionantes como la alimentación y el acceso al agua. Otro ejemplo, los

85 *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, libro XIX, abril de 2013, tomo 3, p. 2254 (Tesis: I.4o.A.9 K).

derechos políticos (a votar, ser votada o votado, dirigir los asuntos públicos y participar en la función pública) no deben mirarse de manera independiente de los derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y a la igualdad y no discriminación (Serrano y Vázquez, 2013, p. 38).

### *Dimensión objetiva*

Esta doble dimensión, creación judicial alemana, en América ha sido utilizada por la Corte Constitucional de Colombia. Así, Serrano y Vázquez al citar parte de la sentencia de la acción de tutela T-1, 247,553, de 5 de junio de 2008 reproducen y explican:

En sede de tutela se busca evitar el desconocimiento del derecho y cuando ello no resulta factible, por cuanto el daño se ha consumado [como ocurrió en el caso que se examina]<sup>86</sup> entonces debe protegerse la dimensión objetiva de los derechos violados<sup>87</sup>. [...] No se busca, por consiguiente, reparar el daño que como tal sufre el sujeto con ocasión del desconocimiento de sus derechos constitucionales [para efectos de lo cual existen las acciones pertinentes por la vía ordinaria]. Se pretende, más bien, evitar que estas situaciones de violación protuberante y generalizada de derechos se repitan adoptando medidas que, en suma, pretenden la protección de los derechos constitucionales fundamentales (Serrano y Vázquez, 2013, p. 12).

Cualquier acto que atente contra la paz, necesariamente afectará en sus dos dimensiones los derechos humanos.

### **Conclusiones**

El conflicto en el caso colombiano es muy particular y diferenciado, tan solo en sus antecedentes evidenciamos que lo acontecido durante la Conquista y la Colonia originó capítulos de violencia que no culminaron de forma adecuada, produciendo múltiples enfrentamientos fruto de ese evento. Así, los intereses enfrentados después de la independencia originaron la división bipartidista del país que solo se terminó de manera clara con la Constitución de 1991; conflicto bipartidista que ocasionó el levantamiento guerrillero de las FARC-EP, el ELN, el EPL, el M-19, entre otros grupos subversivos alimentados por las corrientes

86 La muerte de un niño por falta de atención médica.

87 Derechos de la madre: a conformar una familia, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

comunistas de la antigua URSS y la revolución cubana. Estos grupos, que en sus orígenes combatían la violencia promovida por el Estado colombiano conservador, generaron con posterioridad el surgimiento de grupos de autodefensa que, con la entrada del narcotráfico, se consolidarían como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Con este pequeño relato se demuestra cómo el conflicto colombiano se genera por la insatisfacción de las víctimas al no ser tratadas adecuadamente por parte del Estado, además sobresale la heterogeneidad de estos enfrentamientos, pues no nos encontramos frente a un combate entre dos ejércitos como se presentaba en las guerras de antaño; en la realidad colombiana estamos ante un enfrentamiento entre varios actores, que no solo utilizan armas no convencionales, sino que su mismo accionar es diverso y poco ortodoxo, generando que sean miles los colombianos que de algún modo sean víctimas de esos conflictos.

Cada una de estas víctimas, por su misma condición, es acreedora de los derechos de la verdad, la justicia y la reparación; derechos que deben ser materializados por el Estado, debido a que desde 1945 los Estados tienen la obligación principal de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos a cada una de la personas sujetas a su jurisdicción, obligación estipulada en un sinnúmero de instrumentos jurídicos internacionales; sin embargo, como se evidencia en el caso colombiano, con la presencia de un conflicto interno tan diferenciado es difícil que el Estado en verdad cumpla con esos deberes, razón por la cual, ante la impotencia de salvaguardar la dignidad de sus asociados, está obligado a cumplir con un deber secular a dicha obligación consistente en garantizar los derechos que se mencionaron al inicio de este párrafo. Ya cercanos a la firma de un acuerdo de paz que generará en el país un estado de posconflicto, donde se aplicará necesariamente una justicia transicional, para que esta cumpla con las demandas internacionales y, sobre todo, regionales, específicamente por la Corte IDH al momento de garantizar el cumplimiento de los artículos uno y dos de la CADH, es necesario incluir en dicha justicia a cada una de las víctimas con medidas de reparación, verdad y justicia, con el fin de que legitimen ante la comunidad internacional el posconflicto que se avecina.

Como resultados del derecho comparado realizado con el avance legislativo en materia de víctimas en México se evidencia cómo Colombia, de forma jurisprudencial y legal, estipula los mismos derechos que la comunidad regional

y universal demanda para la satisfacción de los derechos de las víctimas; sin embargo, con la posibilidad de un posconflicto es indispensable crear políticas de inclusión que contengan y ejecuten todos estos preceptos.

Lo anterior se logrará con la destinación de mayores recursos a los centros de memoria histórica, y con la inclusión de políticas en camino a determinar, como primera medida, la cifra real de víctimas, aumentando el capital humano de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), proliferando su desconcentración y logrando que dicha unidad tenga sedes en cada uno de los departamentos de Colombia para poder, en el terreno, lograr consolidar dicha cifra real, además de lograr que los dos millones de víctimas ya inscritas en el Registro Único de Víctimas sean atendidas con medidas de satisfacción; medidas urgentes e inmediatas pero no definitivas. Es necesario que los acuerdos que se logren se consoliden con los mecanismos con los cuales las víctimas tengan en los procesos de justicia transicional una participación especial en la que se pueda evidenciar el cumplimiento de los derechos de verdad y justicia, y como resultado de estos se logre, con la participación activa de los actores en la comisión, la reparación, restitución, indemnización y demás medidas integrales de satisfacción, con lo cual en verdad se logrará que no se repitan dichos acontecimientos, pues estos actores se integrarán debidamente en la sociedad.